

**JUR 2002\275457**

**Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunidad Valenciana núm. 725/2002 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª), de 30 abril**

Jurisdicción: Contencioso-Administrativa

Recurso núm. 1758/1998.

**Ponente:** Ilmo. Sr. D. José María Zaragoza Ortega.

TRANSPORTE TERRESTRE. DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

**Texto:**

En la ciudad de Valencia a treinta de abril de dos mil dos

En la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, compuesta por los Ilmos. Sres D. JOSE Mª ZARAGOZA ORTEGA, Presidente D. JOSE BELLMONT MORA y D. FERNANDO NIETO MARTIN Magistrados, ha pronunciado la siguiente

**SENTENCIA N° 725/02**

En el recurso contencioso administrativo n° 1758/98 interpuesto por la mercantil AYORA, BORONAT Y SIRES SA., representada y defendida por el Letrado D. Fernando M. G. contra resoluciones de la Dirección General de Tráfico, de 3.4.98 y de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana, de 5.6.97 habiendo sido parte en los autos la Administración del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado y Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSE Mª ZARAGOZA ORTEGA.

**ANTECEDENTES DE HECHO**

**PRIMERO.-** Interpuesto el recurso y seguidos los trámites prevenidos por ley, se emplazó a la demandante para que formalizara la demanda, lo que verificó mediante escrito en qué suplicó que se dictase sentencia anulando las resoluciones impugnadas.

**SEGUNDO.-** Por la parte demandada se contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitó se declarase la plena conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas.

**TERCERO.-** No habiéndose recibido el proceso a prueba se emplazó a las partes para que evacuasen el trámite prevenido en el art. 78 de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción, y cumplido dicho trámite quedaron los autos pendientes de votación y fallo.

**CUARTO.-** Se señaló la votación y fallo del recurso para el día 23.abril.2002.

**QUINTO.-** En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

**PRIMERO.-** Constituye objeto de este recurso contencioso administrativo, la resolución de la Dirección General de Tráfico de fecha 3 de abril de 1998 en la que estima infringido el art. 36.6 del Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera aprobado por RD. 74/92, de 31 de enero y, en consecuencia, modifica la resolución impugnada (acuerdo de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana, de 5 de junio

de 1997, que imponía a la mercantil E. AYORA, BORONAT Y SIRES SA., una multa de 100.000 pts como autora de una infracción del art. 198.h) del RD. 1211/90) en cuanto al precepto infringido, manteniéndose la sanción impuesta por estar dentro de los límites establecidos en el art. 202.1 del citado RD. 1211/90, para corregir infracciones graves.

La citada mercantil, actuando como recurrente en esta causa, alega que el 31.enero 97, fue denunciado por la Guardia Civil de Tráfico, el vehículo marca Scania, propiedad de dicha mercantil; matrícula ..., cuando circulaba por el kilómetro 129 de la N-344, dirección Almería, haciendo constar como objeto de dicha denuncia: "Circulan transportando 2700 litros de (gasoil 2) fueloil 2, de Valencia a Caudete AB, no utilizando el itinerario alternativo, autovía N-340 a N-330, que se encuentra abierto al tráfico, y circulando por carretera ordinaria no autorizada". Se notifica al recurrente la incoación de expediente sancionador el 13.marzo.97, y por escrito de 2.abril siguiente se formulan alegaciones. El 5.junio.97 se formula propuesta de resolución, y en igual fecha resolución sancionadora que es notificada el 12 junio siguiente, sin desvirtuar las alegaciones presentadas ni señalar el itinerario completo que hubiera tenido que seguir el vehículo de la empresa recurrente. Contra esta resolución se interpone recurso ordinario que es desestimado por acuerdo de 3 de abril de 1998 donde proponen un itinerario a seguir que excede de toda lógica, sin comprobar la realidad o no de las obras que se estaban realizando en el tramo de Fuente la Higuera a Almansa, siendo esas obras el motivo por el cual el conductor del vehículo decide desviarse por Fuente la Higuera hasta alcanzar la N- 330. La resolución dictada -se sigue diciendo en la demanda- es nula de pleno derecho por no estar dictada por el órgano competente, tal y como se señala en el art. 204.1 del RD. 1211/1990, de 28 de septiembre, que aprueba el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (Gobernadores Civiles o Delegados del Gobierno de la provincia respectiva) siendo así que la resolución esta suscrita por "El/la Jefe/a de la Unidad de Sanciones". Dicha resolución es igualmente nula por haber prescindido totalmente el procedimiento, norma no respetada en el presente caso al no contener, con precisión, los datos fijados en el art. 207.2 de aquel Reglamento.

**SEGUNDO.-** Se dice que la resolución sancionadora no está dictada por órgano competente, lo cual no es cierto, por cuanto la decisión que firma "El/la Jefe/a de la unidad de sanciones" (folio 11-exp.), no es la resolución sancionadora, sino el oficio donde se notifica reglamentariamente dicha resolución, que si esta correctamente firmada y dictada por el órgano competente en el folio 10 de aquel expediente (Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma Valenciana). También ha de rechazarse por incorrecta, la infracción, que se dice, del art. 207.2, RD. 1211/90 por cuanto lo aquí actuado (denuncia de la Guardia Civil de Tráfico) no coincide con el contenido de aquella norma (denuncia formulada por persona interesada). Y aunque la referencia fuera al art. 207.1 del citado texto legal, también sería inapropiada, pues todos los requisitos que allí exige que se consignen figuran en la denuncia que encabeza el expediente administrativo. Indiquemos, también, en relación con el alcance y contenido de la denuncia formulada que el hecho de coincidir la misma con la resolución sancionadora que luego se dicte, no quiere decir otra cosa que la denuncia fue correcta en la imputación de hechos, su autoría y la fundamentación jurídica que citaba. En cuanto al fondo, cabe decir que son ciertos los hechos recogidos en la resolución sancionadora de conformidad con la presunción de certeza de las denuncias formuladas por la Guardia Civil de Tráfico (art. 76 RDL. 339/90, de 2 de marzo, en relación con el art. 137.3, Ley 30/92), cuyo contenido fue debidamente ratificado (folio 7 exp.); siendo por ello, cierto, y así lo evidencia el croquis acompañado con la demanda, que el vehículo conduciendo mercancías peligrosas que circulaba por la N-430 (autovía), dirección Caudete (Albacete) no utilizó como debiera, la dicha autovía, hasta alcanzar la N-330 (también autovía), desviándose en actuación reproachable por la N-344, infringiendo lo previsto en el art. 36.6 del Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera, cuando disponía de autovías como caminos alternativos, cosa que no hizo.

**TERCERO.-** Por todo lo dicho y a la vista de lo razonado, procede desestimar el recurso interpuesto, sin hacer expresa condena en costas (art. 131.1 LJ. 27.12.56).

VISTOS, los preceptos legales citados y demás normas de general aplicación.

### **FALLAMOS**

Se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil E. AYORA, BORONAT Y SIRES SA. contra resolución de la Dirección General de Tráfico, de 3 de abril de 1998, en la que estima infringido el art. 36.6 del Reglamento Nacional de Transporte de Mercancías Peligrosas, aprobado por RD. 74/92, de 31 de enero y, en consecuencia modifica la resolución impugnada (acuerdo de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Valencia, de 5 de junio de 1997 que imponía a dicha mercantil una multa de 100.000 pts., como autora de una infracción del art. 198.h) del RD. 1211/90), e cuanto al precepto infringido, manteniéndose la sanción impuesta por estar dentro de los límites establecidos en el art. 201.1 del citado RD. 1211/90, para corregir infracciones graves.

No ha lugar a condenar en costas a ninguna de las partes litigantes.

A su tiempo y con certificación literal de la presente, devuélvase el expediente administrativo al centro de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACION.-** Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente que ha sido para la resolución del presente recurso, estando celebrando audiencia pública esta Sala, de lo que, como Secretario de la misma, certifico. En Valencia a treinta de abril de dos mil dos.